

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

**PROCESO No.** 76001-33-33-011-2017-00075-01  
**DEMANDANTE:** ANGEL MARIA NAVIA QUINTERO  
**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRA  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Santiago de Cali, Once (11) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020)

**MAGISTRADA PONENTE: Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**

Procede esta Corporación en Sala Jurisdiccional Unitaria de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, contra el Auto Interlocutorio No. 2427 de fecha 22 de noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual se RECHAZO la demanda presentada por el señor ANGEL MARIA NAVIA QUINTERO contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, previas las siguientes consideraciones:

**I. LA DEMANDA**

Acude el señor ANGEL MARIA NAVIA QUINTERO, en su propio nombre, ante el Juez Administrativo a solicitar que en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución No. 4122.0.21.1333 de noviembre 17 de 2015 expedida por el Director de Desarrollo Administrativo del Municipio de Santiago de Cali; b) Resolución No. 002 del 18 de febrero de 2016, expedida por la Comisión de Personal del Municipio de Cali; y c) Resolución M. CNSC20162000017895 del 23 de mayo de 2016, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

A manera de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene al demandado que se le nombre en un cargo de profesional especializado grado 06 o superior y en consecuencia se le paguen los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se expidieron los actos administrativos cuya nulidad se solicita.

**II. EL AUTO RECURRIDO**

El A quo mediante Auto interlocutorio No. 2427 de fecha 22 de noviembre de 2018, procede a rechazar la demanda presentada por el actor, debido a que no corrigió la demanda de acuerdo con los lineamientos señalados mediante Auto No. 1740 del 17 de septiembre de 2018.

Mediante la anterior providencia, el A Quo indicó que como el actor quien actúa en nombre propio, se desempeña como profesional universitario grado 4º en carrera administrativa en el Municipio de Santiago de Cali, no puede ejercer la abogacía en causa propia, porque se encuentra inmerso en la inhabilidad consagrada en el artículo 29 de la ley 1123 de 2007, por lo que tiene que hacerlo a través de apoderado debidamente constituido.

### **III. EL RECURSO**

El actor, actuando en su propio nombre, interpone recurso de apelación contra el Auto interlocutorio No. 2427 de fecha 22 de noviembre de 2018, solicitando sea revocado en su totalidad para que en su lugar se provea sobre la admisión de la demanda, alegando lo siguiente:

- Que el actor se encuentra precisamente dentro de las excepciones establecidas en el numeral 1º del artículo 29 de la ley 1123 de 2007, según la cual, está permitido a los servidores públicos litigar en causa propia.
- Que la Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencias C-1004 de 2007, C-819 de 2010, C-398 de 2011, entre otras, para sostener que en efecto está permitido a los servidores públicos litigar en causa propia, precisamente avalando la exequibilidad de la aludida norma.

### **IV. PARA RESOLVER SE CONSIDERA**

#### **1.- PROCEDENCIA DEL RECURSO.**

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 243 del CPACA.

#### **2.- CONFLICTO JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.**

El conflicto jurídico en esta instancia se contrae a definir si tal como lo sostiene el recurrente, efectivamente, pese a su calidad de servidor público puede litigar en causa propia, de conformidad con lo establecido por el numeral 1º del artículo 29 de la ley 1123 de 2007, y

la doctrina constitucional expedida sobre la materia; o si por el contrario dicha calidad le impide representarse así mismo en un proceso judicial así la causa sea la defensa de sus propios intereses, tal como lo sostiene el A Quo.

### 3.- REGIMEN APLICABLE.

El artículo 29 de la ley 1123 de 2007, que establece el Código Disciplinario del abogado, establece la incompatibilidad general para los servidores públicos de ejercer la abogacía, aunque se encuentren inscritos, ni en uso de una licencia, y así mismo para los abogados contratados o vinculados se establece la prohibición de litigar contra la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio, de la siguiente manera:

**"ARTÍCULO 29. INCOMPATIBILIDADES.** *No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:*

*1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.*

**PARÁGRAFO.** *<Aparte subrayado CONDICIONAMENTE exequible> Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio no interfiera las funciones del docente. Así mismo, los miembros de las Corporaciones de elección popular, en los casos señalados en la Constitución y la ley".*

Sobre la aplicación de la anterior incompatibilidad, se refirió la Corte Constitucional en Sentencia C-1004 de 2007, en la que sostuvo que los servidores públicos no pueden ejercer la profesión de la abogacía, así estén debidamente inscritos y quieran hacerlo en uso de licencia, por regla general, salvo que deban hacerlo en ejercicio de su cargo o cuando el respectivo contrato así lo permita; e igualmente precisó que, en forma permanente no les está permitido, litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el Municipio dependiendo del ámbito de la administración a que se suscriba la entidad o el establecimiento al que estén vinculados. Sin embargo, aclaró que, se permite a los servidores públicos litigar en causa propia y fungir como abogados de pobres.

De la misma forma se pronunció en Sentencia C-819 de 2010, en la que además manifestó que la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el servicio público, al que se refiere la norma en mención, pretende la realización de fines constitucionalmente legítimos, entre los cuales se destacan: (i) evitar que la persona aproveche, en detrimento del interés general, las atribuciones derivadas de su cargo como servidor público en su desempeño

como abogado con intereses privados, sean éstos onerosos o gratuitos; (ii) controlar los riesgos que supone una práctica profesional concomitante entre la actividad pública y privada, donde el interés general puede entrar en tensión con expectativas individuales; (iii) propender por una mayor igualdad entre los abogados, impidiendo que la función pública se traduzca en tratos discriminatorios originados de la vinculación con el Estado; (iv) asegurar la dedicación exclusiva a la función pública y la consecuente realización de los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia que la caracterizan.

Posteriormente en Sentencia C-879 de 2014, la mencionada Corporación reiteró lo sostenido en las dos anteriores en cuanto al alcance de la restricción prevista en la citada norma.

#### **4.- CASO CONCRETO**

En el presente caso, en acopio de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, y los precedentes constitucionales citados, puede observarse que, al contrario de lo sostenido por el A Quo, el interés que mueve al actor al presentar la demanda, no es otro que la defensa de sus intereses subjetivos, lo que se deduce del contenido de las pretensiones formuladas en ella, así como de los mismos actos administrativos impugnados en los que se resolvieron solicitudes suyas frente a un concurso público en el que participó.

Por tanto, ciertamente tal como lo alega el recurrente, en su caso, como la causa que origina la demanda es propia, entonces resulta beneficiario de la excepción prevista en la norma en mención, pese a ostentar la calidad de servidor público del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, y que su reclamación judicial se presente contra dicha entidad y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Por lo expuesto, se revocará la decisión recurrida para en su lugar ordenar al A Quo que provea sobre su admisión, previa verificación de los demás requisitos exigidos por la ley procesal.

En consecuencia, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **V. RESUELVE:**

**PRIMERO.- REVOCAR** el Auto interlocutorio No. 2427 de fecha 22 de noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por el señor ANGEL MARIA NAVIA QUINTERO, y en su lugar se **ORDENA** que se provea sobre la admisión de la misma, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.-** Una vez ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen, para lo de su competencia.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.**

La Magistradas,

  
**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**

Auto Interlocutorio Proceso 2017-00075-01